



Colombia, Ecuador y Venezuela: ¿Disipados vientos de guerra en la región?

María José Becerra Romero

Marzo de 2008

La sucesión de hechos que ha tenido lugar en los últimos días en Ibero América se ha convertido, sin duda alguna, en una de las más grandes crisis entre países de la región pues, en efecto, se han involucrado temas de tanta envergadura, como la soberanía nacional, el conflicto armado colombiano, las relaciones entre los gobiernos de Venezuela y Ecuador con las FARC y la presunta colaboración de éstos gobiernos a dicho grupo guerrillero y no es ingenuo pensar que si bien la crisis ha sido aparentemente conjurada, el conflicto reviste una complejidad de enormes dimensiones, que requiere mucho más que un simple apretón de manos.

Es por supuesto deseable una salida diplomática a conflictos de ésta naturaleza. No era conveniente desde ningún punto de vista avivar los ánimos de guerra que por unos días tuvieron en vilo a los países involucrados y a los espectadores, pues de hecho, de concretarse una avanzada militar, tendría sobre éstos últimos un impacto de no poca importancia, si se tiene en cuenta que éstas problemáticas tienen la capacidad de desestabilizar a toda la región, en la medida en que relaciones comerciales y diplomáticas tienden a resquebrajarse en estos escenarios, lo que trae implicaciones negativas para la economía y las relaciones políticas entre los países en cuestión.

No obstante, son varios los elementos que aquí deben analizarse con detenimiento, en aras de identificar los posibles escenarios que se puedan configurar a partir de ahora para los países involucrados y para la región en general, pues aunque la crisis parece superada, ha quedado claro que la tensión continúa, el problema permanece latente y, aunque en efecto, a raíz del encuentro generado con ocasión de la vigésima Cumbre de Río los mandatarios de Colombia, Venezuela y Ecuador han optado por una salida diplomática y han moderado su discurso, no es difícil vislumbrar que éstos permanecen atentos a los acontecimientos, alertas a emprender nuevas acciones y decisiones que pueden volver a amenazar con desestabilizar a la región.

En efecto, son varias las lecturas que pueden generarse a partir de los hechos ocurridos. Es claro que cada estado involucrado defiende su posición a partir de una serie de argumentos que, dependiendo del lado en el que se encuentren, parece darles la razón.

Desde luego, el primer mandatario colombiano Álvaro Uribe Vélez justificó la incursión de sustropas en territorio ecuatoriano haciendo alusión a una estrategia militar necesaria con miras a dar de baja a Raúl Reyes, segundo en importancia dentro del Secretariado de las FARC- Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia- grupo guerrillero que representa el más grande flagelo que ha tenido el Estado colombiano durante casi cinco décadas. Sin duda, golpe histórico a favor del primer mandatario de Colombia. Esto al menos en cuanto a su política doméstica, pues el pueblo colombiano, agobiado por un conflicto de casi medio siglo, con generaciones y generaciones nacidas en medio de la confrontación, ha sido casi unánime al respaldar al presidente de la nación, trascendiendo incluso la polarización que existe entre quienes apoyan al Presidente y quienes critican su gestión.

Sin embargo el escenario fue diametralmente distinto al examinar los hechos desde afuera, desde la óptica de la región. Ante un primer llamado del presidente colombiano a su homólogo ecuatoriano Rafael Correa para explicar lo ocurrido, el tema parecía resolverse sin mayores inconvenientes. El vendaval político vino cuando el tono de Correa cambió intempestivamente, alineándose a la postura radical del presidente de Venezuela, Hugo Chávez, quien decidió que su país también era parte del conflicto. Aprovechando la coyuntura, Daniel Ortega, presidente de Nicaragua, apoyó también al gobierno ecuatoriano, pues desde hace años éste país centroamericano sostiene con Colombia un litigio territorial por la Isla de San Andrés y Providencia, sobre la cual ya fue reconocida la soberanía de Colombia, faltando solo resolverse la frontera marítima, asunto que hoy por hoy maneja la Corte de la Haya. El resultado: expulsión de embajadores de los países afectados y ruptura de relaciones diplomáticas de Ecuador, Venezuela y Nicaragua con Colombia, en virtud de una violación expresa a la soberanía nacional por parte del Gobierno Colombiano sobre el Estado Ecuatoriano. Más actores de los que el hecho mismo suponía.

Es claro que el tema de la soberanía se constituye como un principio fundante del concepto de Estado. Es innegable que dicha soberanía es inviolable y cualquier hecho contra la misma atenta contra el Estado en cuestión. Por supuesto, era necesaria la intervención de la Organización de Estados Americanos –OEA- para mediar el conflicto suscitado.

Y así fue. Se ratificó el artículo que afirma que el territorio de un Estado es inviolable y por dicha razón no puede ser ocupado por las fuerzas militares de otro Estado, sea cual fuere el motivo para ello.

De igual modo se constituyó un Comisión que estaría conformada por el Secretario General de la OEA, José Miguel Insulza y cuatro embajadores designados por él, para dirigirse a la zona donde ocurrieron los hechos a fin de explorar el lugar y realizar un informe que diera cuenta de los hallazgos encontrados, el cual será examinado en la Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores quienes, en el marco de los artículos pertinentes de la carta de la OEA, deberán darse cita una vez concluida la labor de la Comisión, con el objeto de formular alternativas y recomendaciones encaminadas a generar el acercamiento entre los países implicados.

Llamar la atención sobre la violación de la soberanía del Estado Ecuatoriano era entonces impostergable. Era necesario. En la Cumbre de Río realizada en República Dominicana (escenario oportuno que sirvió para generar el primer encuentro entre los presidentes en cuestión

una vez generada la crisis) Colombia recibió una sanción colectiva por parte de la totalidad de gobiernos de la región, quienes, en efecto, expresaron sus razones para condenar el hecho y solidarizarse con el país afectado. La decisión de la OEA también lo demuestra.

Sin embargo el tema aquí tratado presenta unas aristas que deben ser examinadas en detalle. La decisión de la OEA fue una victoria a medias para ambas partes. Llamó la atención al mandatario de Colombia, como lo pedía el presidente de Ecuador, pero no fue un veredicto condenatorio como éste último lo deseaba. Estableció la OEA la conformación de una comisión de naturaleza más exploratoria que verificadora y esto, por supuesto, da luces sobre la forma en la que puedan desarrollarse los próximos acontecimientos.

Si bien el tema de la soberanía era de primera importancia en el momento de analizar lo ocurrido, también lo era el hecho de que existan campamentos de las FARC establecidos en territorio ecuatoriano. Todos los mandatarios concentraron sus discursos entorno al tema de la soberanía, vital, como ya se ha establecido. Pero dejaron de lado un hecho no menos importante, la existencia de pruebas encontradas en tres computadores personales del jefe guerrillero abatido, que ponen de manifiesto los vínculos entre los mandatarios de Venezuela y Ecuador con la guerrilla que, de la mano del narcotráfico, ha azotado el territorio colombiano de hace casi medio siglo.

Al respecto, es fácil comprender que el contexto actual no permite una arremetida contra Chávez, quien se ha convertido en un actor de primera importancia para la región, con el cual diferentes gobiernos vienen estableciendo importantes alianzas estratégicas que pesan en el momento de respaldar a una u otra parte del conflicto.

No obstante, más allá de los intereses comerciales puntuales que pueda tener cada gobierno, vale la pena que se pregunten que está pasando en la región, pues es un hecho innegable que las pruebas que dan cuenta de un estrecho vínculo entre los gobiernos de Ecuador y Venezuela con la guerrilla de las FARC, ponen de relieve que la estabilidad de la región se puede ver gravemente amenazada.

Es por esto importante que la Comisión designada por la OEA, que tiene por objetivo explorar la zona donde ocurrieron los hechos, indague además los nexos que en efecto puedan existir entre estos gobiernos y las FARC.

Es claro entonces que aún quedan muchos elementos por develar, que no todo está dicho y que si bien la necesidad de una salida diplomática impulsada por los presidentes de la región reunidos en pleno en la Cumbre de Río, unido esto al despliegue mediático de la misma, logró apaciguar los ánimos de guerra que se vivieron durante una semana en la región, lo cierto es que la tensión no ha desaparecido.

Los mandatarios implicados han moderado mucho su discurso; fue evidente el cambio de tono utilizado durante la Cumbre, especialmente por el presidente venezolano que, contrario a los pronósticos, resultó mucho más conciliador que un Rafael Correa radical, sin mucho interés en ceder. Estas actitudes, para algunos impredecibles, son tal vez distintas formas de reacción ante unas pruebas de enorme gravedad que los implican como colaboradores de un grupo armado por todos condenado.

Sea cual sea la razón de este viraje, lo cierto es que no es tiempo aún de considerar conjurada la crisis, pues de continuar las investigaciones e indagar por asuntos que hasta hoy se han pasado por alto, se necesitará mucho más que un apretón de manos, hecho que por supuesto han

advertido los gobiernos implicados, lo que los mantiene alerta y a pesar de los llamados de la comunidad internacional, en vigía de guerra.

María José Becerra Romero
Politóloga Pontificia Universidad Javeriana (Bog, Col)